

**Benito Juárez**

***Documentos,  
Discursos y Correspondencia***

**Tomo 12, capítulo CCXLV**

Selección y notas de  
**Jorge L. Tamayo**

Edición digital coordinada por  
**Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva**

Tomo revisado y anotado por  
**María del Carmen Berdejo Bravo**

Versión electrónica para su consulta  
**Aurelio López López**



**Año 2006**

# **Tomo 12, capítulo CCXLV**

**Anotado y revisado por  
María del Carmen Berdejo Bravo  
(UAM Azcapotzalco)**

**Capítulo CCXLV**

**Inicia sus labores  
La IV Legislatura**

**Diciembre de 1867**

## **CCXLV**

### **INICIA SUS LABORES LA IV LEGISLATURA**

**Diciembre de 1867**

De acuerdo con la convocatoria del 14 de agosto de ese año -recuérdese que el proceso electoral era indirecto-, la designación de electores se llevó a cabo en la mayor parte del país el 22 de septiembre, y reunidos éstos, cumpliendo lo previsto en el artículo 3º de la convocatoria, eligieron diputados al Congreso de la Unión, el 6 de octubre; al día siguiente, Presidente de la República y de la "Corte Suprema de Justicia" y, finalmente, el 8 de octubre, al resto de los funcionarios de la Corte.

Se había señalado, por la mencionada convocatoria, el 20 de noviembre como fecha en que debía instalarse el Congreso, a fin de que, hechos los cómputos correspondientes, todos los demás funcionarios federales de elección popular tomaran posesión el 1º de diciembre inmediato.

Celebradas las elecciones, con gran lentitud se trasladaron los diputados a la capital; en algunos casos por falta de recursos económicos personales e imposibilidad de los gobiernos locales para proporcionarles dinero para su desplazamiento; también porque varios de ellos desempeñaban cargos administrativos locales y tuvieron que esperar la designación de su sucesor.

Desde principios de noviembre, se intentaron reunir los diputados para constituir la junta previa y actuar como Colegio Electoral, lo que no fue posible por el escaso número de representantes que asistían. Fue hasta el 19 de noviembre que se realizó la primera junta formal, con 105

diputados, designándose comisiones para revisar las credenciales y emitir los dictámenes correspondientes.

Nuevamente pudieron reunirse los presuntos diputados el 28 de noviembre, a la una y media de la tarde, asistiendo 115 y fungiendo como presidente de la asamblea el diputado Ezequiel Montes.<sup>1</sup>

Después de dar cuenta de varios asuntos de trámite, los miembros de las comisiones dictaminadoras informaron que para desempeñar su cometido han tenido presente "la Ley Electoral y la de Convocatoria y los artículos constitucionales referentes a elecciones"; concluyen con hacer una proposición a la junta, consultando la aprobación de las credenciales de los electos.

Al pretender poner a discusión los dictámenes, León Guzmán pide se lea una proposición que un grupo de diputados ha presentado, y que por su importancia transcribimos a continuación:

1ª.- No serán aprobadas las credenciales de los individuos que hubiesen reconocido expresamente al llamado imperio, o aceptado de él algún empleo o condecoración, aun cuando hayan sido rehabilitados por el Supremo Gobierno.

2ª.- Los individuos que se hallan comprendidos en el artículo anterior, se servirán manifestarlo a la mesa, y el que no lo hiciere así, será desechado de la Asamblea Nacional, tan luego como ésta llegue a tener los datos de tales hechos.

3ª.- Se excitará a los ministerios para que inmediatamente presenten una noticia de los individuos de que hablan los artículos anteriores, con expresión de los empleos o condecoraciones que hubieren aceptado y de los que reconocieron al llamado imperio, para que la Cámara, en vista de esos datos y de los más que pueda proporcionarse, resuelva si son o no dignos de pertenecer al Congreso de la Unión.

---

<sup>1</sup>En total el número de diputados fue de 203.

Sala de sesiones, noviembre 28 de 1867.

Hilarión Frías y Soto, Manuel Saavedra, Jesús Fuentes Muñiz, Ignacio Antonio Aguirre, Cipriano Robert, Pantaleón Tovar, Agustín Peña y Ramírez, J. C. Doria, José Luis Revilla, Mariano Rojo, Pedro Santacilia, F. D. Macín, E. Cortina, Antonio Tagle, Protasio Tagle, Gabriel M. Islas, J. N. Mirafuentes, J. Alfaro, Carlos M. Escobar, A. Espejel y Blancas, Antonio García, Pedro de Baranda, Juan Sánchez Azcona, F. P. Calderón, José María Condés de la Torre, Antonio G. Carrillo, Nicolás Lemus, Francisco Zérega, Ramón Rodríguez, Santiago Ramos, Gabriel Mancera, Pedro Contreras Elizalde, Feliciano Chavarría, Ramón G. Guzmán.<sup>2</sup>

Por no estar instalado el Congreso, la aprobación a esta proposición tuvo el carácter de resolución económica.

Inmediatamente se acercaron a la mesa los ciudadanos Miguel Rul y Simón Aguirre. El primero manifestó que había servido al imperio, de municipal en México, de miedo al rigor de las disposiciones dictadas por la intervención. El segundo, que sirvió en Puebla, en una junta de beneficencia pública.

Se puso de inmediato a discusión el caso del señor Rul, provocándose un debate acalorado en el que terciaron José Díaz Covarrubias, Guillermo Prieto, Herrera, Gaona, García Brito y Ezequiel Montes. Finalmente se rechazó la credencial del señor Rul por 83 votos y 27 a favor.

Los siguientes días se examinaron las demás credenciales, manteniéndose el criterio sustentado en el acuerdo a que antes se hizo

---

<sup>2</sup> "Crónica Parlamentaria", *El Siglo Diez y Nueve*, México 29 de noviembre de 1867, p.1.

mención, dejando pendientes unas cuantas, entre ellas, las de los ministros Lerdo de Tejada, Iglesias y Balcárcel.

Por fin pudo instalarse el Congreso, el 8 de diciembre, asistiendo a la ceremonia correspondiente al presidente y su gabinete.

Juárez pronunció un discurso de varias cuartillas, en el que intentó, en forma general, hacer una breve reseña de los más importantes actos del gobierno a partir de su regreso a la capital del país. Con tacto y en forma hábil, defendió la consulta que se quiso hacer al pueblo sobre reforma constitucional y anunció que el gobierno no insistiría en que se hiciera el escrutinio de los votos emitidos al respecto y, en su lugar, presentaría al Congreso la propuesta de reformas a la Constitución a que se hizo mención en la convocatoria.

También anunció que resolvía el gobierno renunciar a las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo, no obstante que, según decreto de la III Legislatura, podría conservarlas 30 días más.

Contestó al discurso el presidente del Congreso, Ezequiel Montes. Ambos documentos aparecen en este capítulo.

Francisco Zarco, el gran periodista, escribió pocos días después un comentario al discurso de Juárez, que nos ha parecido conveniente reproducir íntegro.

También publicó su opinión sobre el discurso del señor Montes y lo reproducimos, porque emite juicios importantes sobre la actitud de Montes y la posible actuación del Congreso.

La actividad de los diputados se manifestó en sus frecuentes y agitadas reuniones. En la sesión del 13 de diciembre se abordaron varios interesantes temas, como pedir en forma apremiante al ministro de Guerra informara sobre los contingentes que integran el ejército y además la siguiente proposición suscrita por los diputados Alas y Lemus.

1ª.- El Congreso de la Unión declara que no se ocupará en hacer el escrutinio (que) provocó la convocatoria de 14 de agosto en materia de reforma, por ser contra el artículo 127 de la Constitución.

2ª.- Esta declaración será comprendida en el manifiesto que el Congreso va a dar a la nación.<sup>3</sup>

Con dispensa de trámites, se puso a discusión la propuesta anterior, participando en ella los diputados Dondé, Lemus, Robles Rubio, Alas, Herrera, José Valente Baz y Barreda.

Puesta a votación nominal, se aprobó el artículo 1º por 67 votos a favor y 43 en contra y la segunda por 59 en pro y 49 en contra.

Esta decisión en realidad fue un voto de censura a Juárez y sus ministros, pese a que se le dio el aspecto de una decisión administrativa interior. Tenía razón el diputado Barreda cuando, al oponerse al trámite, hizo notar lo siguiente:

Como la Cámara ha podido conocer, las proposiciones importan la derogación de una ley y por lo mismo deben sujetarse a los trámites que se exigen para la formación de una ley, es decir, discutirse en lo particular y en lo general. Es un negocio grave, que va a tener eco no sólo en la nación, sino en todas las del mundo, por la división que la convocatoria del gobierno causó entre él y el pueblo; y cuando se trata de hacer un reproche al Ejecutivo por haber violado la Constitución, el Congreso debe obrar con gravedad.<sup>4</sup>

Varias semanas antes, Francisco Zarco había escrito sobre la convocatoria la siguiente opinión, que es útil reproducir, porque representa una opinión leal y objetiva de un amigo de Juárez, pero con independencia de criterio y con gran preocupación patriótica:

---

<sup>3</sup> “Crónica Parlamentaria”, *El Siglo Diez y Nueve*, México, 14 de noviembre de 1867, pp. 1 y 2.

<sup>4</sup> “Crónica Parlamentaria”, *El Siglo Diez y Nueve*, México, 14 de diciembre de 1867, pp. 1 y 2.



El gobierno dio una interpretación demasiado lata al artículo en que se declara que el pueblo puede alterar sus instituciones, y apeló a la soberanía popular para ver si las reformas que cree necesarias y urgentes podían introducirse en breve tiempo.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> “Editorial”, *El Siglo Diez y Nueve*, México, 4 de diciembre de 1867.

# **DOCUMENTOS**

**Diciembre de 1867**

DISCURSO PRONUNCIADO  
POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
EN LA APERTURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Diciembre 8 de 1867

Ciudadanos diputados:

El 31 de mayo de 1863, felicité en este lugar a los elegidos del pueblo, por la decisión y la fe con que combatían los buenos hijos de la República, inspirando la segura confianza del triunfo contra una poderosa invasión extranjera. Reunida ahora de nuevo la representación nacional, puedo felicitarlos con mayor motivo, por el triunfo completo de la República.

El pueblo mexicano, con su patriotismo, su valor y su constancia en la lucha, ha salvado su independencia y sus instituciones. En vano pretendió la intervención monárquica destruir a la República y a su gobierno. La intervención desapareció combatida por el pueblo, quedando en pie la República, más fuerte en el interior y más considerada en el exterior.

Los hijos del pueblo, que por su valor y sus sacrificios fueron grandes en la lucha, han sido, después del triunfo, todavía más grandes por su generosidad. Ocuparon sucesivamente todas las ciudades, dando protección y garantías a sus mismos enemigos, sin distinción de nacionalidad.

El gobierno ha creído ser un fiel intérprete de los generosos sentimientos republicanos, limitando la estricta aplicación de la ley al jefe de la intervención y a un número muy corto de los que contrajeron mayor responsabilidad en todas las desgracias nacionales. Fue necesaria la ejecución de Querétaro por los más graves motivos de justicia, unidos

a la exigencia imperiosa de afianzar la paz en el porvenir, para poner un término a las convulsiones intestinas y a todas las calamidades con que la guerra ha afligido a nuestra sociedad.

El ejemplo necesario de la aplicación de la ley a los que ocuparon el primer grado entre los más culpables, ha permitido usar de grande clemencia con todos los demás. La República ha perdonado, en cuanto era posible, a sus malos hijos y ha sido magnánima con los que de fuera vinieron a cubrirla de sangre y desolación.

Han podido ver los calumniadores de la República que, a medida que los efectos de la intervención cesaban en cada lugar, se restablecían allí desde luego el orden público y la obediencia a las leyes. Al mismo tiempo que el pueblo ha vuelto a disfrutar de la libertad de sus instituciones, ha comenzado a gozar también de los beneficios de la paz.

Restablecida en todo el territorio la acción del gobierno nacional, ha empleado los medios que estaban en su mano y el tiempo de que ha podido disponer para reorganizar todos los ramos de la administración. Aunque revestido de facultades discrecionales, ha obrado siempre conforme al espíritu de nuestras instituciones. Se ha ocupado preferentemente de los asuntos federales, dejando expedita la acción de los funcionarios de los estados, para que atendiesen a los asuntos particulares de los mismos.

Cumpliendo el gobierno con su más sagrado deber, convocó al pueblo a fin de que eligiese sus mandatarios, para los poderes federales y de los estados. Señaló el más breve término posible, para que el pueblo designase sin dilación a quienes quisiera confiar sus destinos. No se ha puesto por el gobierno ningún embarazo para que en las elecciones, en la prensa y en todos los actos de carácter político, se haya disfrutado de la más amplia libertad.

Se han dictado las disposiciones necesarias para la organización de los tribunales y la buena administración de justicia. Deseando amparar en lo justo muchos intereses privados, se revalidaron, con reglas equitativas, los actos ejercidos ante funcionarios de la intervención, que no tuvieron ninguna autoridad legítima.

Los establecimientos de instrucción y de beneficencia pública han sido atendidos con la solicitud que merecen tan importantes objetos.

El gobierno ha otorgado la protección y las concesiones posibles a empresas que pueden ser de grande utilidad para el comercio, la industria y los demás ramos de la riqueza pública.

Además de dictar las disposiciones oportunas para regularizar la administración de la Hacienda Pública y para liquidar y reconocer los créditos legítimos, se han procurado todas las economías compatibles con el buen servicio y se ha observado, como regla invariable, no dar lugar al antiguo sistema de negocios, que han sido la causa más eficaz del descrédito y de la ruina del erario. Así han podido atenderse con regularidad, desde la ocupación de la capital, todos los ramos del servicio público y aun las clases pasivas.

Se ha organizado el ejército en el número necesario para las atenciones del servicio militar. Formado de entre los que han combatido digna y patrióticamente contra la intervención, será el firme y leal defensor de la libertad y de las leyes.

El gobierno ha atendido, en cuanto lo permitían sus recursos, a los que se han retirado del servicio, para volver a sus hogares y a sus ocupaciones privarlas. Ellos, lo mismo que los que permanecen en el ejército, han merecido muy justamente los premios y condecoraciones decretadas, como un testimonio de la gratitud nacional.

El intento de la intervención monárquica europea hizo que sólo conserve México buenas relaciones de amistad con las repúblicas americanas, por la identidad de los mismos principios e instituciones democráticas. Durante nuestra lucha, aquellas repúblicas demostraron sus simpatías por la causa de la independencia y de la libertad de México.

Los pueblos y los gobiernos de algunas de las repúblicas sudamericanas hicieron demostraciones especiales por los defensores de la causa de México y por su gobierno. Recientemente ha venido un enviado de Bolivia, en misión especial, para presentar a la República cordiales felicitaciones por su triunfo.

Con los Estados Unidos de América conservamos las mismas relaciones de buena amistad que existieron durante nuestra lucha. Las

constantes simpatías del pueblo de los Estados Unidos y el apoyo moral que su gobierno prestó a nuestra causa, han merecido y merecen justamente las simpatías y la consideración del pueblo y del gobierno de México.

A causa de la intervención, quedaron cortadas nuestras relaciones con las potencias europeas. Tres de ellas, por virtud de la convención de Londres, se pusieron en estado de guerra con la República. Luego, la Francia sola continuó la empresa de la intervención, pero después reconocieron al llamado gobierno, sostenido por ella, los otros gobiernos europeos que habían tenido relaciones con la República, a la que desconocieron, separándose de la condición de neutralidad. De este modo, esos gobiernos rompieron sus tratados con la República y han mantenido y mantienen cortadas con nosotros sus relaciones.

La conducta del gobierno de la República ha debido normarse en vista de la de aquellos gobiernos. Sin haber pretendido nada de ellos, ha cuidado de que no se haga nada que pudiera justamente considerarse como motivo de ofensa y no opondrá dificultad para que en circunstancias oportunas puedan celebrarse nuevos tratados, bajo condiciones justas y convenientes, con especialidad en lo que se refiere a los intereses del comercio.

El gobierno ha cuidado también de que estén bajo la protección de las leyes y las autoridades, los súbditos de aquellas naciones residentes en la República. La eficacia de esa protección ha sido bastante para que no haya lugar a quejas. Prácticamente se ha demostrado que, por la ilustración de nuestro pueblo y por los principios de nuestras instituciones liberales, los extranjeros residentes en México, sin necesidad de la especial protección de los tratados, son considerados con igualdad a los mexicanos y disfrutan de los derechos y las garantías otorgadas por las leyes.

Se ha preocupado la opinión pública por la importancia de la apelación hecha al pueblo acerca de algunas reformas de la Constitución, propuestas en la convocatoria de 14 de agosto. La discusión se ha referido al modo de proponerlas, más bien que a las mismas reformas.

Gran número de ciudadanos han votado en favor de ellas, otros en contra y otros se han abstenido de votar, siguiendo acaso el parecer de los que opinan por las reformas sin aceptar el medio de la apelación al pueblo para resolverlas.

El gobierno expuso su juicio con franqueza en la convocatoria. Manifestó su convicción de que no deberían proponerse reformas en tiempos ordinarios, sino por los medios establecidos en la Constitución y que la apelación hecha al pueblo ahora, no podrá servir de ejemplo para repetirla en circunstancias comunes. El gobierno la consideró justificada en esta vez, por lo extraordinario y excepcional de la situación, en la grave crisis que la República acaba de pasar.

No se conoce todavía con exactitud el resultado de los votos; pero aun cuando se presuma que no lleguen a la mayoría los emitidos en favor de las reformas, son de un gran número de ciudadanos, cuya opinión merece ser considerada. Si se suma este número con el de los que han votado en contra, componen, fuera de duda, una gran mayoría del pueblo, que ha aceptado y usado el medio de la apelación.

Esto fundaría la necesidad de hacer el escrutinio de los votos; pero sobre él pudieran suscitarse cuestiones o dudas que difiriesen la resolución, mientras que el motivo principal, porque se había adoptado el medio de la apelación, era por ser el más breve para resolver acerca de las reformas.

La convicción que ha tenido y tiene el gobierno de que son necesarias y urgentes, le hace preferir que se prescinda de la cuestión de forma, esperando que de otro modo se pueda llegar más pronto a resolverlas. Por esto, en lugar de pedir que se haga el escrutinio, el gobierno someterá los puntos propuestos de reforma a la sabiduría del Congreso, para que pueda determinar acerca de ellos, conforme a las reglas establecidas en la Constitución. Con este fin, se presentará desde luego la iniciativa correspondiente.

Por la ley de 27 de mayo de 1863, se prorrogó la concesión de facultades al Ejecutivo, hasta 30 días después de la reunión del Congreso, o antes, si terminaba la guerra con Francia.



No se podría declarar por México el término del estado de guerra, aunque de hecho no existan hostilidades con aquella nación. Ella fue la que trajo la guerra, sin haber hecho hasta ahora declaración expresa de no continuarla.

Así, pues, debería durar, conforme a la ley, 30 días más, contados desde hoy, las facultades concedidas al Ejecutivo.

Sin embargo, he creído que obraba mejor, declarando, como declaro en este acto solemne, que no haré ya uso de ellas.

Si ocurriese algo por lo que fuera necesario dar mayor acción al gobierno, no dudo del patriotismo de los representantes del pueblo, que le prestarán su auxilio y cooperación, dictando las medidas que su prudencia y alta sabiduría estimaren convenientes.

Me es grato, ciudadanos diputados, devolveros el depósito de la gran suma de facultades que me habíais confiado. Si en el uso de ellas he cometido errores, os pido vuestra indulgencia, en el concepto de que en todos mis actos nunca he tenido más móvil que el interés nacional y la salvación de nuestra querida patria.

En el artículo 2º de la ley citada se puso una restricción acerca de la facultad de celebrar tratados. Con este motivo conviene también manifestar que el gobierno ha tenido el constante propósito de no comprometer en nada a la República y que no ha celebrado ningún tratado convenido o compromiso alguno, con ninguna nación.

Tened a bien aceptar, ciudadanos diputados, los votos que hago con confianza, por el mejor acierto en vuestras deliberaciones y porque, con vuestra ilustración y patriotismo, procuréis en todo el mayor bien de la República.

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO,  
EZEQUIEL MONTES, CONTESTA A JUÁREZ

Ciudadano presidente:

La nación vuelve hoy al ejercicio constitucional de uno de los atributos más preciosos de su soberanía; la facultad de legislar por medio de sus representantes, gracias a la heroica constancia de sus hijos en la gloriosa lucha que ha sostenido por el espacio de cinco años contra la invasión extranjera, y gracias también a la justicia del más grande de los pueblos modernos y del mejor amigo de México: sí, gracias a los Estados Unidos de América, que continúan la obra digna del gran padre de la independencia americana, del fundador de la República en el continente de Colón, del venerable e inmortal Washington, la República de México contará siempre entre sus mejores amigos a los hombres de Estado que dirigieron la política americana durante el período de nuestra crisis. El principio de no intervención, fielmente observado por la primogénita de las repúblicas de este continente, ha sido el único aliado de México.

Un príncipe colocado a la cabeza de uno de los pueblos más civilizados, más poderosos y más aguerridos de la Europa, resolvió destruir la República Mexicana y levantar sobre sus ruinas un trono; para realizar su pensamiento, empleó todos los medios por reprobados que fuesen, desde la violación de la fe pública hasta el asesinato en masa de los prisioneros de guerra; los preliminares de la Soledad de 19 de febrero; la nota de los comisarios franceses del día 9 de abril de 1862; la vuelta a Orizaba del ejército francés el día 20 del mismo mes, sin haber retrocedido a Paso del Macho, y la circular del mariscal Bazaine de 9 de octubre de 1866, serán monumentos perdurables de nuestra justicia y de la falta de razón de nuestro enemigo. Sin embargo, la República está en pie; y hoy, como en 12 de abril de 1862, dice a la faz del mundo: "Los

franceses pacíficos residentes en el país quedan bajo la salvaguardia de las leyes y de las autoridades mexicanas".

Injusto sería atribuir al pueblo francés lo que sólo es obra de su jefe; la prensa independiente y la tribuna libre nos han hecho plena justicia (repetidos aplausos en las galerías); los discursos imparciales de los oradores Berryer, Picard, Thiers y Julio Favre son los precursores de una política juiciosa y racional, que reconocerá nuestra justicia y reparará nuestros agravios.

Es satisfactorio que el gobierno haya cultivado con solicitud las relaciones de amistad y de comercio que felizmente no han dejado de existir entre la Unión Americana y México. Lo es también, que nuestras hermanas las repúblicas de la América del Sur nos hayan dado constantes pruebas de simpatía en los días de nuestra desgracia, y que piensen hoy estrechar sus relaciones de amistad con nuestra República.

México no rehusa su amistad y su comercio a ningún pueblo de la tierra; pero México no solicitará las relaciones diplomáticas de ninguna nación; ha probado al mundo que es capaz de defender sus derechos soberanos contra un enemigo poderosísimo; y está convencida de que no necesita de que ningún gobierno extranjero reconozca su existencia como nación independiente.

El estado de la República en el interior no es todavía perfecto; pero preciso es convenir en que se ha adelantado en el camino del bien, más de lo que pudiera esperarse: las ciudades de Puebla, Querétaro, Mérida, México y Veracruz, se han rendido al gobierno legítimo y han sido ocupadas por el ejército republicano con un orden superior a todo elogio, después de haber sufrido largos y penosos sitios; y la República ha sostenido sus derechos en la primera mitad del presente año con una fuerza armada de más de 70,000 hombres. No es extraño que todavía se registren algunos hechos reprobados que el gobierno no ha podido evitar; pero reconocida su autoridad en toda la extensión del territorio nacional, pronto reinará la seguridad en las personas y en las propiedades en todas partes. El Ejecutivo puede contar con toda la cooperación del Congreso para hacer efectivas las garantías individuales.

Es doloroso que la necesidad de afianzar la paz no haya permitido al gobierno ser tan clemente en el uso de la victoria en el mes de junio, como lo ha sido después; pero no debió ni debe olvidarse que la salud del pueblo es la suprema ley; que el usurpador dio repetidas pruebas de que en nada estimaba los verdaderos votos de los mexicanos sobre su forma de gobierno; demasiado sabía que ni un solo pueblo abrazó la causa de la intervención, sino subyugado por las bayonetas extranjeras, y que todos volvieron al orden legal, luego que los franceses se retiraron; y sin embargo, él se obstinó en seguir llamándose soberano de México; su vida, pues, era incompatible con la tranquilidad de la República. Los asesinatos de Tacubaya reclamaban desde abril de 1859 el castigo de los que murieron con el jefe de la intervención.

No han transcurrido cinco meses desde que el gobierno regresó a la capital, y ya en varios estados funcionan sus autoridades constitucionales; el Congreso de la Unión abre hoy el primer período de sus sesiones ordinarias y muy pronto se instalarán los otros dos poderes federales; la diligente solicitud del gobierno por el restablecimiento del orden constitucional es evidente.

Desembarazado el gobierno de las atenciones de la guerra, ha podido consagrar su acción a todos los ramos del servicio público: la administración de justicia, las mejoras materiales, el ejército y la Hacienda han sido materia de varias leyes y resoluciones administrativas. Es muy laudable que los pesos del tesoro público valgan ya lo mismo que los de cualquier particular, y que se haya destruido una de las causas de las desgracias públicas.

El pueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de su competencia, en los términos establecidos por la Constitución federal; el Presidente de la República tiene derecho de iniciar leyes; por consiguiente, el proyecto de reformas constitucionales será enteramente legal en su principio y en su progreso; su término será el que crea justo el legislador.

El Congreso ha oído con placer que el jefe del Poder Ejecutivo devuelve a su origen las autorizaciones que le fueron concedidas en las leyes de 11 de diciembre de 1861, de 3 de mayo, de 27 de octubre de

1862 y de 27 de mayo de 1863, porque este acto significa que la paz puede mantenerse con las facultades constitucionales del gobierno, y que éste está muy lejos de merecer las calificaciones de la prensa monárquica de Europa. ¿En dónde se ha visto que los verdaderos tiranos resignen ante el representante del soberano las facultades que le usurparon?

El Poder Ejecutivo cumplirá, sin duda alguna, con el deber que le impusieron las leyes de 27 de octubre de 1862 y de 27 de mayo de 1863; dará cuenta al Congreso del uso que hizo de las autorizaciones de que hablan esas leyes; entonces resolverá el Poder Legislativo, si las recompensas decretadas en favor del ejército nacional son las únicas a que se haya hecho acreedor en la segunda guerra por la independencia; entretanto, yo no temo decir que soy intérprete fiel de los sentimientos del Congreso de la Unión, afirmando que está satisfecho de la conducta que han observado los beneméritos generales García, Riva Palacio, Régules, Corona, Escobedo y Díaz (don Porfirio); jamás desesperaron de la salvación de la República; lucharon constantemente contra el invasor y contra sus aliados; y hoy son un modelo de fidelidad a las instituciones y de obediencia al Presidente de la República. Han comprendido perfectamente, como comprende el Congreso, que la conservación de la paz y la observancia de las leyes, deben ser objetos de constante y esmerada solicitud de todos los funcionarios públicos.

Los legisladores constituyentes de 1857 invocaron el santo nombre de Dios al decretar el Código fundamental que hoy nos rige, nosotros también lo invocamos hoy para dar principio a nuestros trabajos constitucionales. ¡Que el soberano autor y conservador de las sociedades humanas, que aquél por quien los legisladores decretan lo justo, se digne escuchar vuestros votos, que son los nuestros, por el acierto en nuestras deliberaciones y porque procuraremos, en todo, el mayor bien de la República! Todos los representantes del pueblo venimos animados de los más sinceros y ardientes deseos en favor de la paz pública, de la fiel observancia de las leyes, del respeto inviolable a las garantías individuales y, sobre todo, de la conservación de la soberanía y de la independencia de México.

FRANCISCO ZARCO COMENTA  
EL DISCURSO DEL PRESIDENTE JUÁREZ  
EN LA APERTURA DE SESIONES DEL IV CONGRESO

Aunque entre nosotros, los discursos que se pronuncian por el jefe del Ejecutivo y por el presidente del Congreso no tienen la importancia de los mensajes del presidente de los Estados Unidos, que contienen el informe circunstanciado de todos los ramos de la administración pública; aunque tampoco pueden ofrecer el interés de los discursos del trono en las monarquías constitucionales, donde se discute la contestación de las cámaras, iniciándose así un gran debate político; en esta vez, por lo extraordinario de las circunstancias, por ser la reunión del Congreso el complemento de los triunfos nacionales y el principio de la restauración del orden legal, se esperaba con viva ansiedad la palabra del jefe del Estado aguardando importantes declaraciones, tanto en la política extranjera como en la política interior, declaraciones que hicieran cesar toda incertidumbre y calmaran la agitación de los espíritus, provocada por la convocatoria y por las discusiones a que ha dado lugar en todo el país.

Como los ojos del mundo están fijos en México, prometiéndose los liberales y los amigos de la justicia que entremos de una vez con paso firme en la senda del orden y del progreso y vaticinando los reaccionarios que daremos nuevas muestras de incapacidad para gobernarnos por nosotros mismos y presentaremos el espectáculo de nuevas catástrofes que rematen en la pérdida de nuestra nacionalidad, es de suponer que el discurso presidencial sea leído y comentado en el mundo entero, viendo en él un dato para prever el probable porvenir de la República.

Todo esto hace que las palabras pronunciadas en la apertura de las sesiones, sea de mayor importancia, de mayor valor que en circunstancias

ordinarias. El público, que conoce los discursos de antes de ayer, podrá juzgar hasta qué punto pensaron en todo esto sus autores.

El discurso del señor Juárez no contiene informes detallados sobre la administración pública, porque esta tarea ha quedado reservada a las memorias de los secretarios del despacho. En el discurso domina un tono sereno y tranquilo en que se ha excluido la expresión de toda pasión y todo resentimiento. Así convenía al hablar en nombre de un pueblo que, fundado en la justicia y gracias sólo a su propio esfuerzo, ha sabido recobrar todos sus derechos. Hay, sin embargo, en el estilo, cierta languidez, cierta debilidad que hacen la impresión de la fatiga del viajero, que después de una penosa peregrinación, vence su última jornada.

Absteniéndonos de toda crítica bajo el aspecto de vista puramente literario, nos limitaremos a tomar nota de aquello que revela la política del gobierno y de las declaraciones que nos parezcan de alguna trascendencia.

El presidente felicita a la representación nacional por el triunfo completo de la República, y rindiendo justo tributo al patriotismo, al valor y a la constancia del pueblo mexicano, asienta que la intervención desapareció, quedando en pie la República más fuerte en el interior y más considerada en el exterior. Al expresar esta verdad que está a los ojos de todos, no hay la menor jactancia.

Los elogios que con tanta justicia se hacen de lo hijos del pueblo, que por su valor y sus sacrificios fueron grandes en la lucha, y después del triunfo, todavía más grandes por su generosidad, están de acuerdo con el sentimiento público, que es todo de gratitud hacia los valientes defensores de la independencia, que el mérito de haberla salvado, reúnen hoy el de ser el más firme apoyo del orden constitucional.

Es notable el pasaje en que se justifica la ejecución de Maximiliano y de sus principales cómplices. La determinaron los más graves motivos de justicia, unidos a la exigencia imperiosa de afianzar la paz en el porvenir para poner un término a las convulsiones intestinas y a todas las calamidades con que la guerra ha afligido nuestra sociedad. No debía decirse más para justificar un acto en que el gobierno fue fiel ejecutor de la ley y la aplicó sin deslumbrarse por los títulos, ni por los

antecedentes del caudillo de la intervención. Sí podía haberse añadido, para honra del gobierno, que se vio en la necesidad de desechar las súplicas de una potencia amiga, porque eran superiores a todo las exigencias de la justicia nacional y porque haber accedido a aquellas súplicas, hubiera equivalido a aceptar una nueva especie de intervención.

Se habla en seguida del perdón que, en cuanto era posible, se ha dispensado a los malos hijos de la República, y en este respecto queda alguna oscuridad en cuanto a las miras del gobierno sobre la concesión de indultos y amnistías. Nadie habrá que deplora que se haya ahorrado el país el terrible espectáculo de la ejecución de todos aquellos que, conforme a la ley y como traidores a la patria, habían incurrido en la pena capital. Pero si bien esa sangre no era necesaria para la consolidación de la República, el sentimiento público ha estado lejos de aprobar la completa impunidad de grandes culpables y sobre todo la absoluta falta de regla en la aplicación de la severidad y de la clemencia. El Ejecutivo parece haber esquivado el tratar de esta cuestión, pero creemos difícil que la representación nacional pueda excusarse de examinar todo lo que se ha hecho en materia de indultos, conmutaciones de pena, secuestro, arreglos con los secuestrados y rehabilitaciones. El país no apetece innecesarios rigores, pero sí anhela justicia, cree inmoral la impunidad y no puede aprobar que queden confundidos el mérito y el crimen, el patriota y el traidor.

El gobierno alude a sus trabajos de reorganización y declara que no ha puesto ningún embarazo para que en las elecciones, en la prensa y en todos los actos de carácter político, se haya disfrutado de la más amplia libertad.

Ligeras indicaciones se hacen sobre los actos del gobierno que se refieren a la administración de justicia, a la instrucción, a la beneficencia pública y las mejoras materiales. Sobre todos estos puntos, es de esperar que sean completos los informes de los ministros respectivos.

En materias de Hacienda y de crédito, encontramos la importantísima declaración de que ha cesado el antiguo sistema de negocios que fue siempre ruinosísimo y de que el gobierno, con las rentas ordinarias, puede atender a los ramos todos del servicio público. En esta



materia, es digno el gobierno de sincero e imparcial elogio, y la obra de orden y de moralidad que ha emprendido puede ser completada por los legisladores, si cuidan de reducir los gastos, señalando un presupuesto cuya moderación facilite la baja de algunas contribuciones.

En cuanto al ejército, sólo se dice que ha sido organizado en el número necesario para las atenciones del servicio militar y que, formado de entre los que han combatido digna y patrióticamente contra la intervención, será el firme y leal defensor de la libertad y de las leyes. Tal es la creencia del país entero, que se siente tranquilo al no contemplar ya en la fuerza armada un elemento de confusión y de desorden; pero generalmente se cree que el ejército puede ser reducido todavía, que hay mucho que hacer para perfeccionar su organización y que sería conveniente emplearlo en un objeto digno de su patriotismo, en restablecer la seguridad en todo el país.

En cuanto a recompensar por los grandes servicios que ha prestado el ejército, es de esperar que el Congreso no sólo confirme las concedidas por el Ejecutivo sino que sea intérprete de la gratitud nacional, honrando de una manera digna a los que combatieron denodadamente por la causa de la patria.

En cuanto a negocios exteriores, refiere el presidente que el intento de la intervención europea hizo que sólo conservase México buenas relaciones de amistad con las repúblicas americanas, que durante la lucha dieron muestras de simpatía por la causa de nuestra independencia y de nuestra libertad. Se alude a las demostraciones especiales que en nuestro favor hicieron varios pueblos y gobiernos de Sudamérica y a la venida de la legación boliviana. Aquí deseábamos encontrar consignado el propósito de estrechar las relaciones de amistad con las repúblicas hermanas y recomendada la idea de la alianza continental.

Justo era expresar reconocimiento por las simpatías del pueblo de los Estados Unidos y por el apoyo moral que su gobierno prestó a nuestra causa.

Si ese apoyo no pasó nunca de moral, de ello resulta mayor honra para México; y si fue un poco tardía la acción de la diplomacia americana, esta circunstancia sirvió para hacerla más vigorosa y más

resuelta, porque en vez de debatir en abstracto el principio de la no intervención, pudo apoyarse en el hecho que tenía delante de la heroica decisión de nuestro pueblo, de no someterse jamás al yugo del extranjero. Nuestras relaciones con los Estados Unidos deben estrecharse de manera que resulten mutuas ventajas a las dos repúblicas y ambas cooperen a consolidar la democracia en América.

La declaración de que las potencias europeas que reconocieron el imperio rompieron sus tratados con México, merece toda nuestra aprobación, pues está enteramente conforme con las ideas que antes hemos emitido a este respecto. Aplaudimos también la resolución de no oponer dificultad para que en circunstancias oportunas puedan celebrarse nuevos tratados, bajo condiciones justas y convenientes, con especialidad en lo que se refiere a los intereses del comercio. Es muy conveniente haber hecho constar en el discurso presidencial el hecho notorio e innegable, de que los extranjeros residentes en México, sin necesidad de la protección especial de sus gobiernos, disfrutaban de las más completas garantías. Ni los periódicos más enemigos de México y que más lo calumnian, se han atrevido a inventar ahora narraciones de atentados contra la vida y la propiedad de los extranjeros.

Al ver tratadas en el discurso las cuestiones extranjeras, tal cual conviene a la dignidad de la República, nos figuramos que se haría punto omiso de la convocatoria y de la apelación al pueblo, creyéndose prudente no renovar discusiones que pueden volver a ser apasionadas; que se juzgaría conveniente limitarse a iniciar en tiempo oportuno las reformas constitucionales que tenga por más acertadas el Ejecutivo. Nos engañamos. Una gran parte del discurso se refiere a esta cuestión y aunque se abandona la idea de la computación de los votos emitidos acerca de la reforma y aunque se anuncia, lo que sinceramente celebramos, la resolución de conformarse a los trámites constitucionales, lo cual hará cesar todo motivo de alarma; la confesión de haber equivocado el camino no es tan franca como debiera ser.

Se dice con exactitud que la discusión se ha referido al modo de proponer las reformas más bien que a las reformas mismas; pero se cree que los ciudadanos que se abstuvieron de votar siguieron el parecer de

los que opinan por las innovaciones, sin aceptar el medio de la apelación al pueblo para resolverlas. La abstención podrá interpretarse de distintas maneras; pero la que nos parece más razonable es creer que los que se abstuvieron, creyeron que el gobierno no tenía ni siquiera la facultad de interrogarlos.

Al fin es laudable y prudente que el gobierno no insista en que el Congreso se ocupe de computar los votos emitidos, pues esta retirada del Ejecutivo evita grandes embarazos y da a conocer que él mismo conoce que no pueden subsistir como permanentes las innovaciones que en la ley electoral introdujo la convocatoria. Así queda expedito el camino para proceder a la reforma, sin faltar a los trámites constitucionales, que son una garantía de acierto, y de que los cambios que se hagan sean conformes con las exigencias de la opinión pública.

La declaración importantísima del discurso y la que hace muchísimo honor al presidente, a su consecuencia política y a su adhesión a los principios liberales, es la de que se desprende desde luego de las facultades omnímodas, aunque, conforme a la ley que se las concedió, pudiera conservarlas por 30 días después de la reunión del Congreso. El presidente obra de una manera digna, desinteresada y patriótica, al abdicar la dictadura, devolviéndola a la representación nacional. El presidente no sólo da muestras de abnegación y de que es el primero en desear el restablecimiento de la libertad, sino que da un grande ejemplo de respeto a las instituciones y anuncia al país el hecho altamente satisfactorio de que es posible gobernar con la ley y sólo con la ley. La consecuencia práctica de la declaración presidencial es que cesen desde luego todas las medidas excepcionales, quedando restauradas las garantías individuales en toda su plenitud. La propiedad, el domicilio, la libertad individual, están ya bajo el amparo de la Constitución y la libertad de la prensa queda bajo la garantía del jurado.

Encontramos la mayor sinceridad en las siguientes palabras del discurso: "Me es grato, ciudadanos diputados, devolveros la gran suma de facultades que me habéis confiado. Si en el uso de ellas he cometido errores os pido vuestra indulgencia, en el concepto de que en todos mis actos nunca he tenido más móvil que el interés nacional y la salvación de

nuestra querida patria". Juárez, como demócrata y como liberal, no puede creer que haya estado libre de errores y apela a la indulgencia nacional. Este paso lo enaltece mucho más a nuestros ojos, que las pretensiones a la infalibilidad de que hacen alarde los gobernantes absolutos. Y sean cuales fueren esos errores, Juárez tiene derecho a la indulgencia de su patria, porque ella lo considera como su más fiel representante, como el sostenedor de su independencia y como el salvador de los grandes principios de la democracia. México reconocerá siempre que Juárez cumplió con su deber, y esta es toda la gloria a que pueden aspirar los que sirven a países regidos por instituciones republicanas.

La reunión del Congreso, tan luego como se ha restaurado la paz, es un grande acontecimiento que está diciendo al mundo que no en vano invocaban los mexicanos, durante la lucha, su Constitución republicana, y que no en vano, contra la bandera aborrecida del extranjero, tremolaba, en manos de los libres como lábaro del pueblo, la declaración de los derechos del hombre y de la reforma social.

El discurso del Presidente de la República contiene importantes declaraciones sobre la política extranjera y en este punto expresa fielmente la voluntad nacional; abandona la idea de reformar la Constitución de otra manera que como ella misma establece y contiene la abdicación de la dictadura para volver al orden constitucional.

Prescindiendo de detalles secundarios que el presidente ha dejado a los secretarios del despacho en puntos administrativos, creemos que el discurso, tanto por lo que contiene respecto de lo pasado, como por las sanas intenciones y los patrióticos propósitos que revela, será visto con satisfacción por todos los buenos mexicanos.

Francisco Zarco

APOSTILLAS DE ZARCO  
AL DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO

Es en extremo difícil llevar la voz en nombre de una asamblea, sabiendo que hay en ella diferencia de opinión. El presidente del Congreso, conforme a la Constitución, no puede contestar sino en términos generales el discurso del Presidente de la República; su respuesta tiene que ser una improvisación y no hay tiempo de que consulte el parecer de los miembros más influyentes de la Cámara. De todo esto proviene que la contestación al Ejecutivo haya sido siempre una lánguida paráfrasis de cada párrafo, sin que exprese las opiniones ni los propósitos de la representación nacional.

En nuestros hábitos parlamentarios ha estado siempre, que cuando el Congreso ha creído necesario exponer al país su sentir en grandes cuestiones, expide un manifiesto que redacte una comisión y después discute toda la asamblea.

En esta vez el público está tan ansioso de conocer la marcha que han de seguir el Congreso y el gobierno, que ha buscado y esperaba importantes declaraciones en la respuesta del presidente de la Cámara, anhelando encontrar el programa del período legislativo y conocer hasta qué punto será posible que se conserve la armonía entre los dos poderes. Esta esperanza se fundaba también en la fama oratoria de que con tanta razón goza el presidente del Congreso y en la creencia de que un hombre de sus antecedentes políticos no puede soltar palabras que no sean de una gran significación.

Pero el señor Montes no podía cambiar las circunstancias, ni vencer las dificultades de que hemos hablado al principio. Su discurso, verdaderamente notable bajo varios aspectos, no puede considerarse como el programa de la sesión, y hay que esperar las primeras

resoluciones de la asamblea para saber hasta qué punto está de acuerdo con las opiniones de su ilustrado presidente.

El señor Montes, al celebrar la restauración del orden constitucional, rinde un justo tributo a la heroica constancia del pueblo mexicano en la gloriosa lucha que ha sostenido por el espacio de cinco años contra la intervención extranjera. Debe decirse siempre, que México luchó sin auxilio extraño y no contó más que con el apoyo moral de los amigos de la justicia en todos los países de la tierra. Debemos a los Estados Unidos un grande apoyo moral que consistió en que se negaran siempre a reconocer al llamado imperio, y el mismo servicio nos prestaron todas las repúblicas americanas, haciendo ver a la Europa que la intervención era sentida como un agravio a todo el continente. Durante la primera época de la lucha, los Estados Unidos se encerraron en sus leyes de neutralidad, que no siempre guardaron de una manera enteramente imparcial.

Al empezar a declinar la intervención, fue cuando el gobierno de Washington, contemplando los sacrificios de un pueblo que luchaba, no sólo en su propia defensa, sino en defensa de la América toda, y siguiendo el impulso irresistible de la opinión pública, instó a Napoleón porque retirara sus ejércitos y respetara la independencia de México. No negamos que los Estados Unidos prestaron entonces un gran servicio a nuestra patria y apresuraron el desenlace de los acontecimientos; pero tampoco puede negarse que la acción diplomática del gobierno americano fue demasiado tardía, y que aquel gobierno tuvo que ceder a las exigencias de la opinión pública. El tributo de reconocimiento, que a la primogénita de las repúblicas de este continente tributa el señor Montes, es justo en verdad, pero lo sería más si se refiriera al pueblo americano y no a sus hombres de Estado. Estos hombres de Estado, lo repetimos, cedieron al impulso de la opinión y antes habían negado ala Cámara de representantes el derecho de intervenir en las cuestiones extranjeras y habían dado satisfacción a Napoleón para que no se ofendiera de las resoluciones adoptadas por dicha Cámara en favor de México. Los discursos e iniciativas del malogrado Winter Davis, pueden presentarse en comprobación de lo que acabamos de decir.

El presidente del Congreso ha hecho bien en recordar todas las violaciones de la fe pública y del derecho de gentes en que incurrió Napoleón al comenzar las hostilidades, y en presentar el magnífico contraste que resulta en favor de México de la protección que no han dejado de tener de nuestras leyes y de nuestras autoridades los franceses pacíficos.

Es verdad que la expedición de México ha sido una aventura personal de Napoleón y no la obra del pueblo francés. Decirlo es conveniente, pero tal vez no lo es tanto hacer elogios oficiales de Berryer, Picard, Thiers y Favre, porque estos elogios pueden acaso comprometer la independencia de esos distinguidos oradores y hacerlos blanco de las calumnias de Napoleón que se complacerá en pintarlos como aliados de los juaristas.

Muy digna y decorosa es la declaración del señor Montes, respecto de las relaciones diplomáticas de México con las potencias europeas.

"México, ha dicho, no rehusa su amistad y su comercio a ningún pueblo de la tierra; pero México no solicitará las relaciones diplomáticas de ninguna nación; ha probado al mundo que es capaz de defender sus derechos soberanos contra un enemigo poderosísimo; y está convencido de que no necesita de que ningún gobierno extranjero reconozca su existencia como nación independiente". Vemos con gusto que en este respecto parece haber completo acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo y esto hace esperar que en cuestiones extranjeras no habrá diferencias de opinión.

El señor Montes ha expresado una verdadera aspiración nacional, al decir que se anhela el pronto restablecimiento de la seguridad y de las garantías individuales. El país espera que se realice la promesa de que para lograr este objeto el Ejecutivo cuente con todo el concurso de la representación nacional.

Es notable el pasaje del discurso en que se justifica la ejecución de Maximiliano, declarando que su vida era incompatible con la tranquilidad de la República. La ejecución del archiduque puede ya considerarse como un acto nacional y no como un acto del gobierno, pues la nación entera ha aceptado la responsabilidad del hecho.

Ni una palabra se encuentra en el discurso acerca de la cuestión de si los traidores deben ser tratados con clemencia o con severidad, ni de si en esta materia se aprueba la conducta observada por el gobierno.

Con razón se alaba el afán con que el Ejecutivo ha logrado librar al erario del ruinoso sistema de negocios que fue antes fuente de ruina y miseria.

El pasaje sobre las reformas constitucionales hace punto omiso de la convocatoria, y parece recoger la promesa del gobierno de que se seguirán todos los trámites que la Constitución establece. Tal es el sentido que envuelven estas palabras: "El Presidente de la República tiene derecho de iniciar leyes; por consiguiente el proyecto de reformas constitucionales será enteramente legal en su principio y en su progreso; su término será el que crea justo el legislador".

Se acoge con placer la declaración del Ejecutivo de desprenderse de las facultades extraordinarias y se rinde un justo tributo de aprecio y gratitud a los patriotas generales que más se distinguieron en la lucha extranjera y son hoy el más firme apoyo del orden legal.

En el discurso del señor Montes, que como hemos dicho no puede considerarse como programa de las sesiones, se encuentran, sin embargo, conceptos con los que no puede dejar de estar conforme toda la representación nacional. Tales son los que se refieren a no solicitar las relaciones diplomáticas de ninguna potencia europea, a afianzar la seguridad y las garantías individuales y a observar estrictamente los trámites legales al examinar las iniciativas del Ejecutivo sobre reformas de la Constitución.

Francisco Zarco